

FUE de madrugada. Un coche pasó a la altura de la calle Bailén, número 18, y vio que salía humo de una tienda. Los pasajeros del coche llamaron a los bomberos, y unos minutos después empezaba el zafarrancho. El humo salía del local social de Distribuciones de Enlace, empresa distribuidora al servicio de las editoriales Laia, Barral Editores, Península, Lumen, Tusquets, Anagrama, Cuadernos para el diálogo y Fontanella. Un incendio se comía meses y meses de trabajo, inversiones de editoriales a las que nunca les sobra un duro y, lo que es más grave, un incendio ponía en peligro vidas y haciendas de los vecinos de la manzana. Las investigaciones policiales llevaron a la conclusión que ya todo el mundo se oía: el incendio había sido provocado mediante un artefacto de relojería conectado con plástico explosivo.

Aunque no se ha identificado a los autores concretos del atentado, es facilísimo presumir su tendencia política. Se trata de un golpe más de los que desde hace unos cuantos años la han tomado con el arte y la cultura. Ahora ya no van a por librerías concretas, sino a por empresas distribuidoras de libros. Se trata de una sensata corrección táctica que ha de reportarles mejores y mayores logros que en el pasado. Lástima que en esta ocasión los vecinos de la manzana de la calle Bailén hayan estado a punto de comprobar en su propia piel las ventajas que se derivarían de un sistema político controlado por incendiarios.

Pero esta vez puede decirse que el agua destinada a apagar el incendio de Distribuidores de Enlace ha servido para colmar el vaso. Las reacciones indignadas han sido extensas y radicales. Van desde la unanimidad de la prensa de la ciudad hasta el propio Ricardo de la Cierva, director general de Cultura Popular. De la Cierva ha argumentado que las editoriales afectadas cumplen con todos los requisitos legales y que cualquier atentado contra lo que se publica legalmente es un ataque a la legalidad vigente.

No se equivoca don Ricardo. El incendio de Distribuidores de Enlace es un ataque contra la cultura en general, contra el espíritu de cambio en abstracto y contra la política aperturista de la Dirección General de Cultura Popular en concreto. Uno de los máximos éxitos de la política editorial del actual Ministerio de Información había sido precisamente el debilitar el largo y tradicional recelo que siempre había existido entre las editoriales avanzadas y la Administración. La decidida toma de posición del director general y de la Delegación en Barcelona del Ministerio de Información, ha sorprendido y satisfecho, porque se trata de la primera vez que ante atentados de extrema derecha, gentes vinculadas con el Gobierno dicen esta boca es mía y no de la extrema derecha.

El presidente de la Agrupación Nacional de



FAHRENHEIT EN BARCELONA

Editores, señor Pérez González, se ha manifestado también con mucha contundencia: «Con gran sentimiento de vergüenza ante nuevo brutal ataque a la libertad y a la cultura. Ante lamentable situación prometemos decidido apoyo». Un apoyo que será necesario, porque las pérdidas se calculan en unos seis millones de pesetas. Ya se habla de una ayuda especial de la Dirección General en forma de compras de fondos editoriales para bibliotecas públicas. Esta medida ayudaría a la empresa afectada y a los lectores de bibliotecas públicas, hasta ahora puestos a régimen de lecturas bromúricas.

La progresiva identificación entre la prensa barcelonesa y la sociedad que la lee ha propiciado sustanciosos editoriales periodísticos en contra de esta pesadilla anticultural que de vez en cuando orquestan unos cuantos fantasmas familiares. La *Vanguardia* venía a decir: «¡No volvamos a las andadas!», y *Tele-Express* lanzaba un exigente editorial, en el que, entre otras cosas, se decía lo siguiente: «En el espacio de un mes han cambiado el gobernador civil y el jefe superior de Policía. Este es el primer atentado que se produce durante su período de mandato. Con respeto y con firmeza, queremos pedirles —recogiendo el sentir de la mayoría del pueblo de Barcelona— que se localice a los culpables, con nombres y apellidos,

y que calga sobre ellos todo el peso de la ley. Pues la violencia —y esto lo saben todos los gobernantes— sólo puede engendrar la violencia, porque las afrentas de este tipo son de las que hacen perder los nervios hasta a los más civilizados». En su sección «A punta seca», el director de *Tele-Express*, Ibañez Escofet, meditaba con la referencia indirecta del atentado y hacía suyas las palabras de Miguel Dalibes: «Si no reaccionamos a tiempo, todos llevaremos el estigma de aquel espíritu que empezó quemando los libros de Freud y Einstein y acabó haciendo jabón con las grasas de los cuerpos humanos, incluidos los niños».

Así están las cosas. Si los autores del incendio querían notoriedad, han conseguido impopularidad; si querían asustar, han conseguido indignar; si querían frenar la marcha ascendente de una sociedad entera hacia la libertad, han conseguido dar una mayor coherencia a una sociedad progresiva que quiere libros para leer y no para quemarlos. Por otra parte, el hecho de que el incendio hubiera podido significar una tragedia extracultural ha indignado a muchos ciudadanos, incluso a algunos ciudadanos que consideraban los lfos de Picasso, Antonio Machado, Tres i Quatre, El Cinc D'Oros, como cosas de «políticos», que ni les iban ni les venían. ■ M. VAZQUEZ MONTALBAN.

